

EL ALCALDE

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

SE PUBLICA CUATRO VECES AL MES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: QUINCE pesetas al año, y al mes DOS pesetas.—PAGO ANTICIPADO

NÚMERO 1.184

Se despachan las consultas gratis si afectan al cargo que desempeña el suscriptor.—Por las consultas de Derecho : : : : : se abonará 10 pesetas : : : : : Toda la correspondencia al Administrador de EL ALCALDE: Desengaño, 12.—Madrid

24 Febrero 1925



SUSCRIPCIÓN MONSTRUO DE AÑO NUEVO

Al que se suscriba y abone las 15 pesetas que cuesta al año esta revista, recibirá gratis, sin otro desembolso, además del periódico, y a correo seguido:

Un precioso botón insignia para Secretario.

<i>El Derecho Municipal, que vale...</i>	20 ptas.
<i>El Derecho Civil</i>	20 »
<i>El Derecho Político y Administrativo</i>	20 »
<i>El Manual y Reglamento de Haciendas Locales</i>	2 »
<i>El Programa a oposiciones a Secretarios de Ayuntamiento</i>	1 »
<i>El Manual de Defraudación y Adquisición preferente de Fincas por el Estado</i>	1 »
<i>El Indicador Municipal para 1925.</i>	1 »

Total valor..... 65 ptas.

Nota.—Esta suscripción sólo se servirá a los funcionarios municipales y por el término de dos meses, y, habiendo escaso número de estas obras, en caso de agotarse alguna, se devolverán las 15 pesetas a los que no hayan alcanzado el beneficio de este lote tan valioso.

TALENTO Y JUVENTUD

Ni somos ni queremos ser políticos del antiguo ni del nuevo régimen; pero ello no ha de hacernos incurrir en el lugar común de abominar a tontas y a locas de la política, que estimamos la más alta misión de los hombres conscientes, que a ellos, por una selección lógica, es a quienes incumbe la función de gobernar a los pueblos.

Con lo dicho queda implícitamente consignado que

no somos ni aduladores ni detractores de la actual dictadura militar, debida a una triste realidad de las circunstancias por que la nación atraviesa. Mas no por ello habremos de dejar de aplaudir sus aciertos, y, según nuestro modo de ver, ninguno tan grande como el haber puesto su mirada en Calvo Sotelo para llevarlo a la Dirección general de Administración local.

El hablar de Calvo Sotelo despierta en el mal pergeñador de estas líneas tiempos que, siendo de ayer, parecen ya muy lejanos; tiempos en los que, casi adolescente, el actual director de Administración local obtenía un ruidoso y merecido triunfo en las oposiciones a abogados del Estado, en las que sin más armas que sus talentos múltiples y profunda cultura general y pública, obtenía con el número uno una ovación clamorosa de los que tuvimos la satisfacción de presenciar aquellos inolvidables ejercicios.

Y el adolescente, el niño casi, no tenía suficiente con la preparación de unas oposiciones que a cualquier otro muchacho despierto hubiera absorbido las veinticuatro horas del día, sino que simultaneaba con ellas una labor de titán al frente de la Mutualidad Obrera Maurista, en la que se reveló como socio eminente y organizador formidable, con sus conferencias del Ritz, en las que a todos encantó, así por el fondo como por la forma de sus disertaciones; con su activa intervención en la por entonces agitada vida política y callejera de la juventud a que pertenecía; mostrándonos como uno de esos proteicos talentos salidos de Galicia, de esa bendita tierra, tan pródiga en bellezas naturales como en hombres eminentes.

En lucha con uno de los representantes más caracterizados del caciquismo, y sin otro apoyo que el que le prestaba su palabra vibrante, su intensa cultura y su amor a la tierra gallega, obtuvo el acta de diputado a Cortes, cuando aun no tenía la edad reglamentaria para ser elegido; y bien puede afirmarse que, en estas últimas Cortes de medianías endiosadas, fué él uno de los contados que, aun cuando en vacío, se esforzaron por levantar su nivel y conservaron inmaculada la pureza de sus ideales y principios.

Educado en la escuela y en las doctrinas del único político cumbre de las últimas décadas, de él aprendió, ampliándolo y mejorándolo, el sentido de la imprescindible reforma de la Administración local que su juvenil firma ha llevado a las columnas de la *Gaceta* y que con su sin par competencia se esfuerza en encarnar en el mortecino espíritu municipalista español.

Y decimos que mejoró la concepción de Maura, porque, en contraposición a éste, comprendió que en los Ayuntamientos, fuese cual fuese la organización que se les dé, el elemento permanente, el que representa la continuidad en los mismos, es el Secretario, pudiendo muy bien aplicarse a ellos el aforismo popular de «Dime quién es el Secretario y te diré qué Ayuntamiento tienes». Por eso, porque a su claro talento y conocimiento de la vida municipal española, sobre todo en los pequeños Municipios, no podía escapar esa verdad, es por lo que ha dado un paso de gigante en la dignificación de esa meritisima clase, dotándola de una estabilidad que en vano perseguían hace muchos años, y elevando sus emolumentos a un nivel decoroso en relación con el desastroso estado de las Haciendas municipales.

Si los secretarios no pecan de ingratos, y asegúramos que no, no habrá uno solo de ellos que no bendiga el nombre de su bienhechor y bienhechor al par de los Municipios a quienes sirven; y creemos llegada ya la hora de que todos ellos, sin faltar uno, testimonien al ilustre joven esa gratitud, que él no podrá menos de estimar como ninguna, por lo mismo que viene de los humildes, a los que siempre amó en el transcurso corto, pero brillante, de su vida pública.

En su virtud, la Dirección de esta revista abre una suscripción para ofrendar al señor Calvo Sotelo un artístico album en el que figuren los nombres de todos los secretarios de Ayuntamiento de España, a cuyo fin recibiremos los pequeños óbolos que se nos envíen para tal fin, publicando la relación de los donantes que se asocien a este homenaje.

La Dirección de esta revista encabeza la suscripción con 25 pesetas.



PRÁCTICAS

En la antigua contabilidad municipal se unían a las cuentas municipales unas hojas en las que se hacían constar, quizá sin la debida extensión, la razón de las alteraciones sufridas en las cifras de los diferentes artículos de los presupuestos, con cuyos razonamientos quedaban aclarados y justificados algunos extremos de la cuenta que pudieran ser constitutivos de reparos.

En la actual liquidación de presupuestos estas hojas han desaparecido totalmente y su modelo anti-

guo, completamente inaplicable, por haber sido sustituidas por una Memoria explicativa de la cuenta, que no sólo debe comprender la explicación de tales alteraciones, sino el historial del año económico perfectamente razonado y, a ser posible, documentado, si no con certificaciones u otra clase de documentos, cuando menos con referencias concretas a los mismos.

Esta es la Memoria a que se refiere el artículo 154 del Estatuto, estableciendo como obligación de la Comisión permanente su redacción, con atención al «estado de las cuentas, obras, fondos y administración municipal», por lo que realmente se hace, no ya difícil, sino imposible la utilización de formulario que, de hacerse, resultaría siempre deficiente en razón a no poder generalizar el caso, ya que éstas Memorias se refieren siempre a casos concretísimos y aun más muy particulares de cada pueblo, no siendo posible ni aun calcular la extensión de las diferentes consideraciones que debe comprender tal trabajo.

No es difícil, sin embargo, poder realizar tal operación acertadamente, pues los datos que los libros y expedientes obrantes en las oficinas municipales proporcionan exactamente, dan realizada toda la labor, quedando sólo en cuanto a su expresión una cuestión de forma que fácilmente puede orillarse con éxito, dada la práctica que los señores secretarios tienen en la redacción de documentos.

Nota.—Esta sección de «Prácticas» irá en todos los números en lo sucesivo, por las que se irán aclarando las dudas que vayan ofreciendo la aplicación del Estatuto y sus Reglamentos.



REGLAMENTO DE SANIDAD MUNICIPAL

La *Gaceta* publicó, aprobándolo por Real decreto, el Reglamento de Sanidad Municipal.

Es muy extenso. Las disposiciones generales dicen así:

Todos los Ayuntamientos estarán obligados a aprobar, en el plazo de seis meses, un Reglamento sanitario, en el cual se atenderán concretamente las necesidades y condiciones especiales del término municipal.

Igualmente deberán comprender en las Ordenanzas municipales las disposiciones relativas a policía sanitaria de vías públicas, mercados, mataderos, viviendas, tiendas de comestibles, establecimientos públicos, fábricas e industrias insalubres.

Deben procurar, por cuantos medios las leyes ponen a su alcance, la municipalización de los servicios de aguas potables, aguas residuales, mataderos, cementerios, enterramientos y abastos de leche.

Caso de no hallarse municipalizados estos servicios, estarán sometidos en su instalación y funcionamiento a la intervención y vigilancia sanitaria de los

Ayuntamientos, por intermedio de sus organismos técnicos.

A la misma inspección sanitaria están sujetos los lavaderos, urinarios, casas de baños, casas de dormir, fondas, posadas, barberías, tiendas, talleres, fábricas, especialmente de conservas; establecimientos industriales, escuelas y todos los locales destinados al comercio de sustancias alimenticias.

Conforme a lo prevenido en el artículo 216 del Estatuto, atenderán los Municipios al servicio de higiene pecuaria en la forma dispuesta por la ley y reglamento de Epizootias.

En cuanto a las aguas potables, se obliga a los Ayuntamientos a implantar procedimientos que corrijan la excesiva mineralización, si la hubiere, y a depurar las aguas que en cantidades menores de un centímetro cúbico acusen la presencia del *bacterium coli*, así como a condicionar debidamente las captaciones y conducciones y a clausurar los pozos de aguas peligrosas.

En cuanto al establecimiento y conservación de un sistema de evacuación de los excretas, y, en general, de las llamadas aguas negras, se dice a los Ayuntamientos que pueden establecer sistema de alcantarillado, que éste ha de tener la necesaria pendiente y construcción sólida e impermeable, y habrá depuración a la salida, y que todas las acometidas en la red estarán provistas de los tubos de ventilación y sifones necesarios.

No podrán desaguar en los ríos sin previa depuración, a no ser que el estudio especial de cada caso demuestre que la autodepuración destruye o neutraliza los materiales vertidos, recuperando la masa líquida, antes de llegar al primer poblado, aguas abajo, las cualidades bacteriológicas y químicas que tenían antes de recibir el contenido de la red. El sistema de depuración que convenga adoptar, ya sea físico (clarificación, sedimentación, absorción, filtración intermitente, etc.), ya químico (desinfección), o ya biológico (lechos bacterianos, fosas Imhoff, barros activos, campos de irrigación, etc.), es problema en cuya resolución entran factores variables y distintos, y que solamente pueden ser resueltos por los técnicos para cada urbe, con la cooperación de las Juntas municipales de Sanidad.

Cuando la evacuación de las aguas residuales pueda hacerse en el mar la depuración no es indispensable; para la orientación, situación y longitud del emisario dentro del mar se tendrán en cuenta las condiciones de las mareas, para evitar las descargas al descubierto y el reflujo a la orilla de los materiales vertidos.

Queda terminantemente prohibida la construcción de pozos negros, y donde no sea posible establecer redes de alcantarillado se acudirá a los sistemas que mejor convenga a las condiciones particulares de cada caso (fosas sépticas, fijas o móviles), y, en último término, a los pozos de fondo y paredes impermeables, con cubierta hermética, soterrada a 25 centímetros por lo menos.

Se prohíbe emplear las materias excrementicias brutas para el abono de terrenos que no sean de alto cultivo, a condición, en éstos, de encontrarse a más de 200 metros de poblado y de cubrir siempre con una capa de tierra dichas materias; utilizar los líquidos afluentes de los pozos sépticos, pozos Monras o negros o depósitos de decantación para el riego de terrenos en los que se cultiven a ras de tierra legumbres o productos destinados al consumo en crudo (fresas tomates, repollos, etc., etc.), y cultivar dichas hortalizas, legumbres, etc., en los campos de irrigación agrícola, o en general, en los que reciban aguas residuales para su depuración, a menos de establecer estos riegos en las condiciones adecuadas para impedir la propagación de los gérmenes productores de las infecciones intestinales.

Se dictan medidas para la higiene en las viviendas y en los establecimientos industriales, que no se diferencian mucho de lo dispuesto hasta ahora.

Se obliga a los Ayuntamientos a perseguir y castigar las adulteraciones, sofisticaciones y falsificaciones de alimentos y bebidas, y a tener un matadero adecuado.

Se prohíbe arrojar a la vía pública inmundicias de ningún género ni cadáveres de animales domésticos, que deberán ser incinerados o enterrados en pleno campo.

También se llama la atención de los Ayuntamientos acerca de supresión de charcas y aguas estancadas, limpieza de las vías públicas e inspección de cuadras, establos, establecimientos públicos y escuelas y conservación de cementerios.

Se dictan medidas para combatir las infecciones y epidemias, y se fija la obligación para los Ayuntamientos de organizar la asistencia benéfica. Subsistirá, sin embargo, el Cuerpo de Médicos titulares y los de Farmacéuticos y Veterinarios titulares, en la forma establecida por el Reglamento de Empleados municipales, y se respetarán los derechos adquiridos por los que desempeñen estos cargos.

Ninguna titular podrá exceder de 300 familias pobres, y si por la extensión del término municipal o por su topografía la asistencia resultara deficiente, el Ayuntamiento dividirá la titular en la forma que aconsejen las necesidades del servicio.

En cada partido médico será obligatorio disponer de un servicio municipal de matronas o parteras para la asistencia gratuita de las embarazadas pobres.

A continuación se prescriben medidas para la inspección sanitaria, la constitución y funcionamiento de las Juntas de sanidad y beneficencia y el funcionamiento de laboratorios municipales, que serán obligatorios para las poblaciones de 10.000 o más habitantes.

Se dispone que los enterramientos de pobres no devengarán derecho alguno municipal, y será obligación de los Ayuntamientos proporcionar gratuitamente la caja o ataúd en que hayan de ser inhumados.

Las infracciones de los preceptos contenidos en este Reglamento que constituyan atentados a la salud pública y no se hallen castigados por el Código penal serán sancionados por los alcaldes, y en su caso, por los gobernadores civiles, con multas hasta el máximo que autoricen las leyes vigentes.

Los gobernadores civiles podrán imponer multas hasta de 2.500 pesetas a los reincidentes en la comisión de las faltas a que se refiere el artículo anterior.

Se añade un apéndice con el Reglamento de ingreso y provisión de plazas de inspectores municipales de Sanidad.

Sólo podrán concursar estas vacantes los médicos

que actualmente pertenecen al Cuerpo de Titulares Inspectores municipales de Sanidad y los que en lo sucesivo ingresen en él mediante examen de aptitud en materias de Higiene y Sanidad.

En los concursos deberán señalarse como méritos preferentes: el más elevado título profesional, los servicios más relevantes y reiterados con ocasión de epidemias o de catástrofes que requieran el auxilio médico, la publicación de trabajos originales, particularmente aquellos relacionados con la misión sanitaria de los inspectores, la antigüedad en la categoría, y, cuando se trate de concursantes que hayan ingresado todos por oposición en el Cuerpo, la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de ingreso.

LEGISLACIÓN

REFORMAS AL ESTATUTO MUNICIPAL

(Continuación.)

13. Para la recta aplicación del artículo 125 del Reglamento de Obras y Servicios municipales, en su párrafo segundo, ha de entenderse que el precio resultante después de las deducciones establecidas en el mismo nunca será inferior al del terreno ocupado por la finca.

14. Los Ayuntamientos que hayan municipalizado algunos de sus servicios deberán consignar los gastos correspondientes a los mismos en un capítulo que tendrá el número 14, bajo el epígrafe de «Servicios municipalizados», corriéndose la numeración de los capítulos siguientes en el modelo oficial de presupuestos, publicado en el Reglamento de Hacienda municipal.

15. La Comisión municipal permanente podrá acordar la imposición de las contribuciones especiales por mejoras con relación a las obras que el mismo organismo pueda aprobar, conforme a lo dispuesto en el Estatuto municipal y en el Reglamento de Organización y funcionamiento de los Ayuntamientos.

La Asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 347 del Estatuto municipal, deberá informar, siempre que lo acuerde el Ayuntamiento, sobre las bases que éste haya de fijar con arreglo al artículo 356, para la aplicación y percepción de las contribuciones especiales comprendidas en el 354.

No obstante lo dispuesto en el artículo 347 del Estatuto, podrá prescindirse de constituir la Asociación de contribuyentes cuando la obra, instalación o servicios que determinen la imposición de contribuciones especiales no exce-

da por su coste total de los límites que establece el artículo 164 del citado Cuerpo legal en su número 1.º Sin embargo, será preciso constituir la Asociación, cuando así lo acuerde la mayoría de los interesados, representando la mayor parte del importe de las cuotas.

A los efectos de esta regla, será preciso computar el coste íntegro de las obras, instalaciones o servicios que formen conjunto indivisible.

De Real orden lo digo a V. E. a los efectos oportunos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 30 de diciembre de 1924.—*El Marqués de Magaz*.

Señor Subsecretario encargado del despacho del Ministerio de la Gobernación.

TRANSPORTES POR CARRETERA

Reglamento de aplicación del Real decreto de 4 de Julio de 1924

CAPÍTULO PRIMERO

De las concesiones y servicios de transportes en vehículos de tracción mecánica.

Artículo 1.º Las concesiones y servicios de transportes en vehículos de tracción mecánica, estarán a cargo de las Juntas central y provinciales, creadas por Real decreto de 4 de julio de 1924, las que se organizarán y desempeñarán sus funciones de acuerdo con los preceptos de la citada disposición y los que fija y determina este Reglamento.

Art. 2.º a) No podrá hacerse más que una concesión por cada línea, comprendiendo los trayectos parciales de la misma, para transportes de viajeros, mercancías o mixtos, cuando las Empresas concesionarias sirvan de

un modo normal a la conducción de la correspondencia pública y demás servicios propios de la concesión. Si se solicitaran nuevas concesiones entre puntos de partida y términos iguales a los de otra ya establecida, tendrá ésta el derecho de tanteo, como igualmente para aquellas que sean prolongación de otras en explotación, o tengan con ellas un punto de contacto que no sea el extremo.

b) En el caso de que habiendo varias concesiones de líneas entre los mismos puntos extremos, hubieran de establecerse otras nuevas de las comprendidas en el inciso anterior, se dará preferencia a la concesionaria que ofrezca mayores ventajas en cuanto a tarifas, canon o material, y si esto no aconteciera, a la que hubiere obtenido la concesión con fecha más antigua. Si la fecha de la concesión fuere igual para varias de ellas, y ninguna ofreciera las ventajas antes indicadas, se procederá a un sorteo para otorgar las nuevas concesiones.

c) Si la Junta de Transportes correspondiente estimase necesario el establecimiento de otros servicios siguiendo el mismo itinerario entre puntos extremos, o entre puntos intermedios de aquél, para servicio normal de la conducción de viajeros, mercancías y correspondencia pública, podrá disponerlo; pero antes lo pondrá en conocimiento de los concesionarios a que afecte, por si alguno de ellos quisiera tomar a su cargo el nuevo servicio. En el caso de ser varios los que acepten, se dará la preferencia al de concesión más antigua, salvo que hubiera alguno de los concesionarios que ofreciese ventajas respecto de tarifas, canon o material, que sería el preferido.

Art. 3.º Se podrán establecer servicios públicos de viajeros y mercancías, independientemente de las concesiones de que trata el artículo anterior, cuando, a juicio de la Junta de Transportes correspondiente se haya evidenciado la necesidad de crear el nuevo servicio, y después de haber requerido sin resultado al concesionario o concesionarios de la línea en explotación para que refuerce el servicio en forma que satisfaga las necesidades que la Junta estime conveniente atender. Las Juntas de Transportes podrán tomar estos acuerdos por iniciativa propia o a petición de los particulares o entidades interesadas, siguiéndose para las concesiones las mismas normas del artículo anterior, incluso el sorteo si hubiera varias proposiciones iguales.

Art. 4.º La intervención de las Juntas de Transportes con relación a los Ayuntamientos, se entenderá que se refiere única y exclusivamente a los caminos de carácter vecinal, y no a las vías urbanas dentro de los casos de las poblaciones, en las que los Municipios regula-

rán con absoluta autonomía cuanto se refiere a transportes.

Art. 5.º Los vehículos con motor mecánico que tengan carácter particular y se destinen al transporte de personas o mercancías, y los automóviles de servicio público matriculados en tal concepto para los servicios urbanos, circularán libremente por las carreteras y demás caminos de servicio público, sin otros requisitos que los impuestos por las disposiciones vigentes, o las que en lo sucesivo se dicten para esta clase de servicios.

Art. 6.º El derecho de tanteo, consignado en el artículo 18 del Real decreto de 4 de julio de 1924, se establecerá de manera explícita en los pliegos de condiciones económicas que sirvan de base a las subastas de acopio, extensión y afirmado de las carreteras, cuando el Ministerio de Fomento no conceptúe que pudiera determinar perjuicio en el servicio público. Cuando en las condiciones económicas citadas nada se exprese sobre este extremo, se entenderá que los concesionarios de líneas no tienen preferencia alguna con relación a otros licitadores.

CAPITULO II

De la Junta Central

Art. 7.º Las concesiones y vigilancia de los servicios de transportes en vehículos de tracción mecánica, estarán a cargo de la Junta Central de Transportes, la cual, además, entenderá en todos aquellos asuntos que el Real decreto de 4 de julio de 1924 y el presente Reglamento le encarga.

Art. 8.º La Junta Central de Transportes estará constituida por vocales natos y electivos.

Serán vocales natos: Los directores generales de Comunicaciones y Obras públicas, el Jefe del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones del Ejército, el Jefe superior de Industria, en concepto de Delegado del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria; el Jefe de la Sección de Transportes del Ministerio de Hacienda, como Delegado de este Ministerio, y el Jefe del Negociado de Conducciones de la Dirección general de Comunicaciones.

Serán vocales electivos: el Representante del Real Automóvil Club de España, los tres representantes de otras tantas Sociedades o Empresas españolas de automóviles, legalmente constituidas, y los tres representantes de las Cámaras oficiales de Industria, Agricultura y Comercio.

Será Presidente el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, quien podrá delegar en el Director general de Comunicaciones, y Secretario, el Jefe del Negociado de Conducciones de la Dirección general de Comunicaciones.

Art. 9.º El Presidente de la Junta Central invitará, con tres meses de anticipación a la fecha en que la Junta haya de renovarse, al Real Automóvil Club de España y, por mediación de los Ministerios de quienes dependan, a las Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura, para que procedan a la elección de sus representantes en la Junta Central para el quinquenio siguiente. Los ministerios aludidos y el Presidente del Real Automóvil Club de España comunicarán oportunamente a la Presidencia de la Junta Central, para los efectos de la toma de posesión, las designaciones que hayan resultado de los respectivos escrutinios.

Art. 10. Los representantes de las Cámaras Oficiales de Agricultura, Industria y Comercio y del Real Automóvil Club de España, no obstante lo establecido en el artículo anterior, podrán ser nombrados y sustituidos libremente por estas entidades en cualquier momento. Los de las Empresas se podrán sustituir por votación de sus representados, la cual deberá ser efectuada, conforme este Reglamento dispone, a petición de las dos terceras partes, por los menos, de los que tengan derecho a voto en la elección.

Art. 11. Los vocales electivos por sufragio de las Empresas habrán de renovarse cada cinco años, como los representantes de las Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura y del Real Automóvil Club de España. Todos éstos serán reelegibles y las elecciones se convocarán y efectuarán dentro del cuarto trimestre del año anterior a la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta Central.

Art. 12. La elección de los representantes de las Empresas concesionarias se efectuará, previa convocatoria, que se formulará por la Secretaría de la Junta Central con un mes de antelación por lo menos.

Para tener derecho a la elección, cada uno de los concesionarios deberá proveerse en la Secretaría de la Junta Central, con dos días por lo menos de antelación al señalado para aquélla, de las papeletas que les correspondan, a razón de una por cada 50 kilómetros de línea de recorrido que tengan en explotación.

En cada papeleta sólo podrá figurar el nombre de un candidato, y con objeto de hacer que la mayoría de los concesionarios asistan personalmente a esta elección, que se verificará en Madrid en el domicilio de la Junta Central, cada votante no podrá ostentar más que tres representaciones.

La elección se efectuará ante una Mesa formada por el Presidente de la Junta Central o el Vocal en que éste delegue, y por otros dos vocales designados por dicha Junta, actuando como Secretario el que lo es de la misma.

Una vez practicado el escrutinio, se hará la

proclamación provisional por la Mesa de los tres individuos que hayan obtenido mayor número de sufragios. Aquéllos, una vez confirmada la proclamación por la Junta en pleno, tomarán posesión de sus cargos el día 1 de enero siguiente.

Art. 13. La Junta Central se reunirá, reglamentariamente, por lo menos una vez cada mes y además siempre que su Presidente lo estime necesario o que una tercera parte de los vocales lo solicite. La convocatoria se hará por la Secretaría con ocho días, por lo menos, de antelación al de la celebración de la Junta, siempre que sea posible.

Para la celebración de sesiones en primera convocatoria será necesaria la presencia de la mitad más uno de los vocales que la componen. Caso de no poder verificarse la sesión por falta de número se efectuará en segunda convocatoria, ocho días después, repitiéndose la citación por el Secretario y pudiendo en este caso celebrar sesión sea cualquiera el número de vocales que se presenten.

Art. 14. Los acuerdos de la Junta Central se tomarán en votación nominal, por unanimidad o por mayoría de votos. Caso de empate decidirá el voto del Presidente.

Art. 15. Cuando se trate de servicios que afecten a más de una provincia, los concursos se celebrarán en Madrid, ante la Comisión de la Junta Central que se designe, siempre que el recorrido del servicio exceda de 30 kilómetros. Si no excediese de esa distancia, entenderá, en el concurso y adjudicación provisional, la Junta que corresponda a la provincia donde el servicio tenga mayor importancia, y en el caso de que las provincias afectadas por aquél la tuvieran igual, aquélla que corresponda al punto de línea que se considere como base o de arranque de ésta.

Art. 16. Contra los acuerdos de las Juntas provinciales sobre concesiones, castigos o caducidades, se otorgará recurso ante la Junta Central. Los de ésta serán también recurribles ante el Ministerio correspondiente, a cuyo fin en el acuerdo se indicará cuál es el Departamento competente. Todos estos recursos deberán interponerse en el término de quince días, a contar de la notificación administrativa del acuerdo.

Art. 17. La Junta Central podrá corregir las faltas en que los concesionarios incurran con multas de 100 a 5.000 pesetas, que se harán efectivas en papel de pagos al Estado. La reincidencia en falta grave, a juicio de la Junta, podrá determinar que ésta dé por caducada la concesión. Los acuerdos de multas y de caducidad de concesiones habrán de tomarse con el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los vocales presentes.

Del Presidente.

Art. 18. Corresponderá al Presidente la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta Central, y proponer a los ministerios que corresponda las disposiciones oportunas que en cada caso procedan.

Presidirá las sesiones por sí o por delegación, y someterá a discusión, que dirigirá, los asuntos que figuren en el orden del día o cuya urgente resolución se acuerde por la Junta.

De los vocales.

Art. 19. Los vocales tendrán el deber de asistir a las sesiones que la Junta Central celebre y cooperar a la labor que a la misma se encomiende. Cada uno de ellos podrá inspeccionar los servicios, dando cuenta del resultado a la Junta Central, la cual, a su vez, podrá delegar en uno o varios de los vocales su representación para instrucción de expedientes o para inspeccionar un determinado servicio.

Del Vocal Secretario.

Art. 20. Estará obligado a llevar los libros de actas y de establecimiento de servicios, que obrarán en su poder, así como, debidamente clasificada, toda la documentación que se refiera a la tramitación de expedientes de concesiones e incidencias que se produzcan en la práctica de los servicios. El libro de establecimiento de servicios comprenderá los itinerarios, horarios y cuantos datos corresponda a cada línea o concesión.

Deberá someter al acuerdo de la Junta los expedientes de concesión que le correspondan y las incidencias o apelaciones, y propondrá al Presidente la adopción de las resoluciones necesarias para ejecutar los acuerdos de ésta, dándoles así carácter ejecutivo, salvo en el caso de que deban ser elevados a los ministerios que proceda. En este último caso formulará a la Presidencia las propuestas oportunas en los expedientes aludidos.

Los gastos de personal y material de esta Secretaría serán sufragados por la Dirección general de Comunicaciones.

De las Juntas provinciales.

Art. 21. En cada capital de provincia se constituirá, dentro de los quince días después de la publicación de este Reglamento, una Junta Provincial de Transportes, integrada por el Ingeniero Jefe de Obras públicas, el Ingeniero Inspector de automóviles de la provincia más antiguo en este cargo, un Ingeniero militar, el Administrador de Correos de la provincia, el Delegado de Hacienda, un Delegado por cada una de las Cámaras oficiales, o de sus Secciones de Comercio, Industria y Agricultura que

existan en la provincia, y un representante de las Empresas, elegido por las mismas, a razón de un voto por cada 50 kilómetros de línea de recorrido en explotación dentro del territorio provincial. Será Presidente el Gobernador civil y Secretario el Oficial de Correos que la Dirección general de Comunicaciones designe.

Art. 22. La concesión provisional y vigilancia de la explotación de los servicios de transportes de tracción mecánica que afecten a cada provincia estarán a cargo de las Juntas de Transportes correspondientes, las cuales, además, entenderán en todos aquellos asuntos que el Real decreto de 4 de julio de 1924 y el presente Reglamento les encarga.

Art. 23. Los vocales electivos por sufragio de las Empresas habrán de renovarse cada cinco años. Estos vocales serán reelegibles, y las elecciones sucesivas se convocarán y efectuarán dentro del cuarto trimestre del año anterior a la toma de posesión de los nuevos miembros de las Juntas. La elección se efectuará previa convocatoria, que llevará a efecto la Secretaría de la Junta con un mes de antelación por lo menos.

Para tener derecho a votar, cada concesionario deberá proveerse en dicha Secretaría, y con dos días de anticipación, de las papeletas que le correspondan, a razón de una por cada 50 kilómetros de recorrido de línea en explotación dentro de la provincia. En cada papeleta sólo podrá figurar el nombre de un candidato, y cada votante no podrá ostentar más que una sola representación.

La elección se efectuará ante la Comisión que la Junta designe, y estará compuesta, al menos, por dos vocales y el Secretario. Una vez practicado el escrutinio, se hará la proclamación provisional por la Mesa, y el que haya obtenido mayor número de sufragios, después de confirmada la proclamación por la Junta en pleno, tomará posesión de su cargo el día 1 de enero siguiente.

Art. 24. El Presidente de la Junta invitará a las Cámaras oficiales de Agricultura, Industria y Comercio que existan en la provincia a que procedan a la elección de sus representantes en el seno de la Junta, haciendo esta convocatoria con tres meses de anticipación a la fecha en que ésta haya de renovarse. Las Cámaras comunicarán a las Juntas las designaciones que hayan resultado, con la anticipación suficiente para que los representantes puedan tomar posesión en la primera sesión del año siguiente.

Los representantes de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Agricultura serán reelegibles, así como los de las Empresas de automóviles, y todos ellos podrán ser sustituf-

dos, por acuerdos de sus representados, en cualquier momento de su mandato.

Art. 25. Las Juntas provinciales de Transportes se reunirán reglamentariamente, por lo menos, una vez cada mes y, además, siempre que el Presidente lo estime necesario o que una tercera parte de los vocales lo soliciten. La convocatoria se hará por la Secretaría, con ocho días de antelación, siempre que sea posible, a los de celebración de la Junta. Para ésta será necesaria la presencia de la mitad más uno de los vocales que la componen.

Caso de no poder verificarse sesión, por falta de número, en la primera convocatoria, se hará una segunda, previa citación por la Secretaría, pudiendo en este caso celebrar sesión sea cualquiera el número de vocales presentes.

Art. 26. Los acuerdos de las Juntas provinciales se tomarán en votación nominal por unanimidad o mayoría de votos, decidiendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

Art. 27. Será privativo de las Juntas provinciales, en su jurisdicción, corregir las faltas en que los concesionarios incurran con multas de 100 a 5.000 pesetas, que se harán efectivas en papel de pagos al Estado, en el plazo máximo de un mes, a contar de la fecha en que reciban la notificación, salvo cuando fuera recurrido el acuerdo ante la Junta Central. En tal caso, este plazo se contará a partir de la notificación de la resolución adoptada por aquélla.

Será condición indispensable, para poder formular el recurso, constituir en la Caja general de Depósitos, y a resultas de él, el importe total de la multa.

Art. 28. La reincidencia en falta grave, a juicio de la Junta, podrá determinar el que ésta dé por caducada la concesión, cuyo acuerdo será firme si en el plazo de veinte días, a contar de la fecha de la notificación, el concesionario o su legal representante no recurre ante la Junta Central, pues entonces continuará prestando el servicio hasta que recaiga el acuerdo de ésta.

Los acuerdos de multa y los de caducidad de concesiones habrán de tomarse con voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los vocales presentes en la sesión.

Del Presidente.

Art. 29. Corresponderá la presidencia de las sesiones al Gobernador civil de la provincia, la que someterá a discusión los asuntos que figuren en el orden del día o cuya urgente resolución se acuerde por la Junta, a su propuesta, o a la de tres vocales por lo menos. Corresponderá asimismo al Presidente la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la

Junta, y formular las propuestas a la Junta Central que se deriven de los acuerdos de la Provincial.

De los vocales.

Art. 30. Los vocales tendrán el deber de asistir a las sesiones que las Juntas celebren y cooperar a la labor que a las mismas se encomiende. Cada uno de ellos, con la representación que ostente, será ponente en los asuntos que afecten a su especialidad.

Art. 31. Los representantes de las Cámaras oficiales de Agricultura, Industria y Comercio podrán ser sustituidos por éstas en cualquier momento del mandato de aquéllos, el cual alcanzará un quinquenio. Los representantes de las Empresas se podrán sustituir asimismo por votación de sus representados, la cual deberá ser efectuada conforme este Reglamento dispone, a petición de las dos terceras partes, por lo menos, de los que tengan derecho a voto en la elección. El mandato de estos últimos representantes será de igual duración que el fijado para los de las Cámaras oficiales mencionadas.

Del Secretario.

Art. 32. Estará obligado a llevar los libros de actas y de establecimiento de los servicios provinciales libros que obrarán en su poder, así como debidamente clasificados todos los documentos que se refieran a la tramitación de expedientes de concesión e incidencias que se produzcan en la práctica de los servicios provinciales. El libro de establecimiento de servicios comprenderá los itinerarios, horarios, tarifas y cuantos datos correspondan a cada línea o concesión.

Deberá someter al acuerdo de la Junta los expedientes de concesión y sus incidencias y proponer al Presidente la adopción de las resoluciones necesarias para la ejecución de los acuerdos de aquélla. Formulará también las propuestas oportunas a la Presidencia en aquellos expedientes que deban ser elevados a la Junta Central por corresponder a ésta su resolución.

Las Juntas provinciales verificarán sus sesiones en los edificios que ocupen los Gobiernos civiles y se instalarán en esos mismos edificios las Secretarías de aquéllas.

Para atender a los gastos de material y demás que puedan producirse, las Juntas provinciales podrán acordar se destine el 20 por 100 de lo recaudado en concepto de canon en el territorio de su jurisdicción, debiendo, en todo caso, justificarse la inversión de esas cantidades ante las Juntas, facultadas para

(Continuará.)

Imp. de Félix Moliner.—Leganitos, 54.